

Coyhaique, a cinco de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 21 de enero de 2025, comparece don ADOLFO SEGUNDO FORMANTEL RUIZ, comerciante, y doña ADELA DEL TRÁNSITO MONTIEL BARRÍA, comerciante, ambos domiciliados en calle Lautaro n° 798, quienes deducen recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, representada legalmente por su Alcalde, don Carlos Gatica Villegas, ambos domiciliados en calle Francisco Bilbao n° 357, Coyhaique, por haber ejecutado actos ilegales y arbitrarios, consistentes en la instalación de más de 20 hitos verticales en calle Cristóbal Colón a la altura de la intersección con calle Lautaro, de esta ciudad, vulnerándose la garantía contenida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: *“1. Que se ordene a la recurrida a retirar del lugar las barras de seguridad instaladas, reponiendo a su estado primitivo el eje izquierdo de la calzada, permitiendo de ese modo el tránsito vehicular por ambos lados de calle Cristóbal Colón; 2. En subdisio de lo anterior, y para el evento que esta ltma. Corte de Apelaciones, estime que existe mérito y/o justificación técnica para mantener los hitos verticales instalados, se ordene igualmente su reducción en número y espacio utilizado, ocupando como parámetro, la ilustración contenida en la fotografía N° 7 de este recurso. 3. Que se condena en costas a la recurrida. (sic)”*.

Que, con fecha 7 de febrero de 2025, don ISAAC OYARZO GUARDA, abogado, en representación de la recurrida incorporó el informe requerido.

Con fecha 28 de marzo de 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 31



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YFXWXTFJWEU

del mismo mes y año, con la comparecencia del abogado don Enrique Velásquez Trujillo, por el recurso; y en contra del recurso, el abogado don Isaac Oyarzo Guarda, quedando en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, los recurrentes fundan su acción señalando que, don Adolfo Formantel Ruiz es propietario del local comercial “Pescadería PROMAR”, ubicado en calle Cristóbal Colón n° 589, Coyhaique, inmueble que arrienda a su propietaria doña Adela Montiel Barría.

Agrega que desde el año 2004 se gestionó la autorización para la habilitación de un estacionamiento en las afueras del local comercial, aprobándose por las autoridades respectivas, sin embargo, en la segunda quincena de diciembre de 2024, el municipio ordenó la instalación de un conjunto aproximado de 21 hitos verticales o barras de seguridad, que ocupan el eje izquierdo de la calzada, frente al estacionamiento habilitado del recurrente, según se advierte en el set fotográfico que se adjunta, viéndose impedido cualquier vehículo que allí se estacione de salir, en la medida que haya tránsito o vehículos en espera de paso.

Refiere que no se entiende la justificación para la instalación de las referidas barras de seguridad, ya que resulta ilógico atendido el sentido del tránsito en las calles en cuestión, provocando un “cuello de botella” y el encierro de los clientes, proveedores y cualquier vehículo que use el estacionamiento. Agrega que esta misma situación ocurre en calle Almirante Simpson, al llegar a la intersección con Cristóbal Colón, pero con menos unidades instaladas.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YFXWTFJWEU

Hace presente que don Adolfo Formantel Ruiz, también es propietario del inmueble que se ubica frente al local comercial (específicamente en la esquina de Cristóbal Colón con Lautaro), por ende, los inmuebles que se encuentran en ambos costados de la intersección en que se ubican los bolardos instalados por la recurrida, son de propiedad de los recurrentes

Por lo anterior, sostienen que se ha vulnerado su derecho de propiedad, garantizado y protegido en nuestra Carta Fundamental, en su artículo 19 numeral 24, no sólo al perturbar el uso y goce, en los términos que estime pertinentes, del estacionamiento cuyo dominio detentan, sino que incluso haciendo inviable que sea utilizado por los recurrentes, su grupo familiar, e igualmente por clientes y proveedores del local comercial.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida admite que instaló hitos verticales (o barras de seguridad), en calle Cristóbal Colón al llegar a la intersección con calle Lautaro, de esta ciudad, sin embargo, descarta que dicho actuar sea ilegal o arbitrario, sosteniendo que dicha decisión está fundamentada a través de un estudio realizado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en agosto de 2022, denominado “ANÁLISIS DE PUNTOS CONGESTIONADOS EN LAS COMUNAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE”, el que tenía como fin solucionar problemas, como son: el aumento de congestión, accidentes y contaminación derivados del aumento del flujo vehicular en las áreas urbanas de las ciudades del país, y con ello implementar medidas de gestión de tránsito.

Explica que, en el caso concreto, dicho informe se pronuncia específicamente sobre la intersección de la Calle Colón con Lautaro, concluyendo que se debía mejorar la seguridad vial y



las condiciones peatonales, por cuanto se identificaron problemas relacionados con la obstrucción de visibilidad, frente a lo cual se proponen medidas de mejoramiento.

Sobre las propuestas definitivas, se consideró el angostamiento de la vía no prioritaria (Cristóbal Colón) a una pista para que el cruce sea de un vehículo a la vez, formalizado mediante la instalación de un disco PARE, lo que no supondría un problema de congestión, porque el flujo de esa vía es menor a su capacidad; además, se propone un bloqueo de la zona de estacionamiento mediante un angostamiento puntual en torno a la intersección de la vía prioritaria (Lautaro), con lo cual se mejora la visibilidad en el cruce al evitar que vehículos estacionados obstruyan la visibilidad.

Agrega que, a raíz de la interposición del presente arbitrio, se solicitó un informe a la Dirección de Tránsito y Transporte Público, respecto del angostamiento de calle Cristóbal Colón al llegar a calle Lautaro, mediante la instalación de hitos verticales, el que indica que la instalación de hitos responde a la ejecución de una cartera de Proyectos de Gestión de Tránsito de bajo costo, que tiene por antecedente el estudio realizado por el Ministerio de Transportes; que de conformidad al artículo 3° letra a) de la Ley N° 18.695, corresponde de manera privativa a las municipalidades aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito público, dentro de la comuna, en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte el Ministerio respectivo; a su vez, que corresponde al municipio la administración de los bienes nacionales de uso público.

Por otro lado, se afirma que revisados los registros de dicha Dirección de Tránsito, no existen antecedentes que indiquen que a “Pescadería PROMAR”, ubicada en calle Cristóbal Colón N°



589, Coyhaique, ni a los recurrentes, se les haya otorgado mediante Decreto Alcaldicio autorización de estacionamiento reservado en dicha dirección, precisando que, si bien existen antecedentes de construcción de estacionamiento, ello no los hace propietarios, manteniendo el recinto su calidad de bien nacional de uso público, bajo administración municipal.

Se adiciona que la referida intersección presenta un alto índice de accidentabilidad, cumpliendo las medidas con las especificaciones técnicas exigidas por la autoridad.

En cuanto a la garantía constitucional presuntamente conculcada, niega la afectación al derecho de propiedad, por cuanto sostiene que la fundamentación jurídica no es pertinente, pues estamos ante un bien nacional de uso público, sumado a que las medidas adoptadas están respaldadas por el estudio referido y resulta coherente con el Plan de Desarrollo Comunal.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: *“El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24º, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”*.



CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito *sine qua non* de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

Igualmente, este Recurso Constitucional sólo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

SEXTO: Que, los recurrentes han hecho consistir el acto arbitrario e ilegal, en síntesis, en la instalación de más de 20 hitos verticales en calle Cristóbal Colón al llegar a la intersección con calle Lautaro, perturbando el uso y goce del estacionamiento del local comercial ubicado en calle Colón N°589 cuyo dominio detentan, haciendo inviable que sea utilizado por los recurrentes, su grupo familiar, e igualmente por clientes y proveedores del local comercial, privando, asimismo, del acceso al segundo inmueble de propiedad de Adolfo Formantel, vulnerando, en



consecuencia, la garantía constitucional prevista en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

SÉPTIMO: Que, para resolver la controversia que se plantea por los litigantes tanto en el recurso como en el informe respectivo, se debe tener a la vista la normativa aplicable al caso, contenida en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en particular, en su artículo 3°, que reza:

“Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientes funciones privativas:

d) Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna, en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo”.

OCTAVO: Que, si bien la Municipalidad recurrida sustenta su actuar en las facultades conferidas en la referida norma, en base al estudio realizado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en agosto de 2022, denominado: “ANÁLISIS DE PUNTOS CONGESTIONADOS EN LAS COMUNAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE”, hay que hacer presente que dicho informe responde a una serie de Estudios Básicos de distintas regiones de Chile, impulsado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, cuyo objetivo principal en la Región de Aysén es crear una cartera de Proyectos de Gestión de Tránsito de bajo costo con una visión integral de mejoras en el ámbito urbanístico y de paisajismo, en las comunas de Aysén y Coyhaique. A su vez, dentro de los objetivos específicos del estudio se contemplan: a) Diagnóstico del funcionamiento actual de los tramos de vía objeto de Estudio; b) Desarrollo, análisis y propuestas de las diversas alternativas de mejoramiento viales en el Área de Estudio, y c) Desarrollo de los proyectos.



Que, como se evidencia del examen de este documento, dicho estudio corresponde a un levantamiento o diagnóstico en materia de tránsito y vialidad de las comunas de Aysén y Coyhaique, dentro de las que se analizan distintas propuestas de proyectos a desarrollar, lo que en ningún caso constituye una fuente normativa del rango que exige el artículo 3 letra d) de la Ley N°18.695, esto es, una ley o norma técnica de carácter general dictada por el Ministerio del ramo, no siendo, en consecuencia, vinculante en los términos expuestos por la recurrida, quien ha excedido en este caso el marco de las facultades que el referido precepto le confiere, al carecer la decisión edilicia de instalar los hitos verticales de un sustento normativo, motivo por el que su actuar deviene consecuentemente en ilegal, sin perjuicio que además, como se dirá, dicho estudio se encuentra desactualizado en atención al tiempo transcurrido y contexto en el que se elaboró.

NOVENO: Que, en ese sentido, la Excm. Corte Suprema ha señalado:

“Décimo: Que, sin embargo, las alegaciones de la recurrida no pueden prosperar, por las siguientes razones:

a) La potestad del artículo 3 letra a) de la Ley N° 18.695 se halla supeditada a lo que "determinen las leyes y las normas de carácter general que dicte el ministerio respectivo", cuestión que guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley N° 18.290 y con los artículos 53 y 54 del Decreto Supremo N° 212 de 1992; y b) Las atribuciones de los artículos 4 letras h) e i) del primero de los cuerpos legales citados es sólo de carácter general y dice relación exclusivamente con las facultades de orden administrativo que la ley reconoce a los municipios, tales como la proposición y ejecución de medidas relacionadas con el



transporte público o la aplicación de normas sectoriales, sin que se pueda entender que se extiende o abarca la potestad para alterar o modificar, de manera inconsulta a la autoridad competente (SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones y Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas), el sentido de calles y caminos y los horarios de tránsito de vehículos, sean éstos públicos o privados.

En este sentido, el artículo 26 letra b) de la Ley N° 18.695 es sumamente claro en cuanto a que a la Dirección del Tránsito de los Municipios le corresponde determinar el sentido de circulación de vehículos, pero "en coordinación con los organismos de la Administración del Estado competentes"; y lo propio puede decirse de la atribución contenida en el literal d) de la misma disposición, en cuanto faculta a los Municipios para, "aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte públicos en la comuna" (Sentencia Corte Suprema de 14 de julio de 2020, en causa Rol 30.003-2019).

DÉCIMO: Que, sumado a la falta de sustento normativo del acto recurrido, se observa una falta de razonabilidad y proporcionalidad en el actuar de la recurrida, lo que torna su actuar en arbitrario, puesto que del estudio citado se evidencia que en la intersección de la calles Colón con Lautaro, existe poco tránsito, pudiendo haberse optado por otro tipo de medidas alternativas para salvar las dificultades pesquisadas en el referido informe, tales como: pasos peatonales o una menor cantidad de hitos, no siendo proporcional, entonces, la instalación de hitos en la cantidad que se hizo, los que reducen la calzada a una sola pista y perjudican la propiedad de los recurrentes y el libre tránsito de las personas.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, el propio



estudio invocado por la recurrida, realizado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, denominado “ANÁLISIS DE PUNTOS CONGESTIONADOS EN LAS COMUNAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE”, data del año 2022 y corresponde a un levantamiento realizado en plena época de pandemia, donde el tránsito vehicular y de personas difiere con creces del existente hoy en día, encontrándose dicho estudio desactualizado y, si bien, pudiera inferirse, por el contrario, que la normalización del tránsito en las vías tras ese fenómeno pandémico ha acarreado lógicamente un incremento de flujo vehicular y de personas en el área, las cifras hechas valer al efecto tampoco hacen plausible la adopción de una medida tan radical como la escogida, que ha provocado la reducción de uso a la mitad de la calzada por la instalación de los mentados hitos en su eje izquierdo.

DUODÉCIMO: Que, por lo antes razonado, esta Corte estima que la situación fáctica descrita en los considerandos precedentes puede ser calificada como un acto arbitrario e ilegal, desde que el actuar de la Municipalidad recurrida no encuentra sustento en una norma legal o técnica de carácter general emanada de la autoridad competente, además de no resultar razonable ni proporcional a los fines perseguidos, conforme a lo ya apuntado, por lo que habrá de acogerse la presente acción constitucional, como se dirá, ya que restringir el uso de un bien nacional de uso público en los términos descritos constituye una decisión unilateral que configura una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos de los recurrentes, en particular, de la garantía consagrada en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política del Estado de Chile, al haberse traducido tanto en la afectación del empleo de un recinto habilitado como estacionamiento comercial por más de una



década, sino con la autorización al menos con la aquiescencia municipal, así como ha resultado demostrado, con la evidencia fotográfica aparejada, que se ha obstaculizado objetivamente el acceso a un inmueble habitacional de dominio privado.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, **SE DECLARA:**

Que, **SE ACOGE** el recurso de protección deducido por don ADOLFO SEGUNDO FORMANTEL RUIZ y doña ADELA DEL TRÁNSITO MONTIEL BARRÍA, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE, representada legalmente por su Alcalde, don CARLOS GATICA VILLEGAS, y en consecuencia, se ordena a la recurrida remover los hitos o barras de seguridad instaladas en la intersección de calle Colón con Lautaro, reponiendo a su estado primitivo el eje izquierdo de la calzada, permitiendo el tránsito vehicular por ambos lados de calle Cristóbal Colón.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Titular, doña Natalia Rencoret Oliva.

Se deja constancia que no firma el Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo, pese haber concurrido a la Vista y Acuerdo de la presente causa, por estar haciendo uso de permiso administrativo.

Rol 28-2025 (Protección).



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YFXWXTFJWEU

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por Ministro Presidente Pedro Alejandro Castro E. y los Ministros (as) Natalia Rencoret O., Luis Moises Aedo M. Coyhaique, cinco de abril de dos mil veinticinco.

En Coyhaique, a cinco de abril de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YFXWTFJWEU